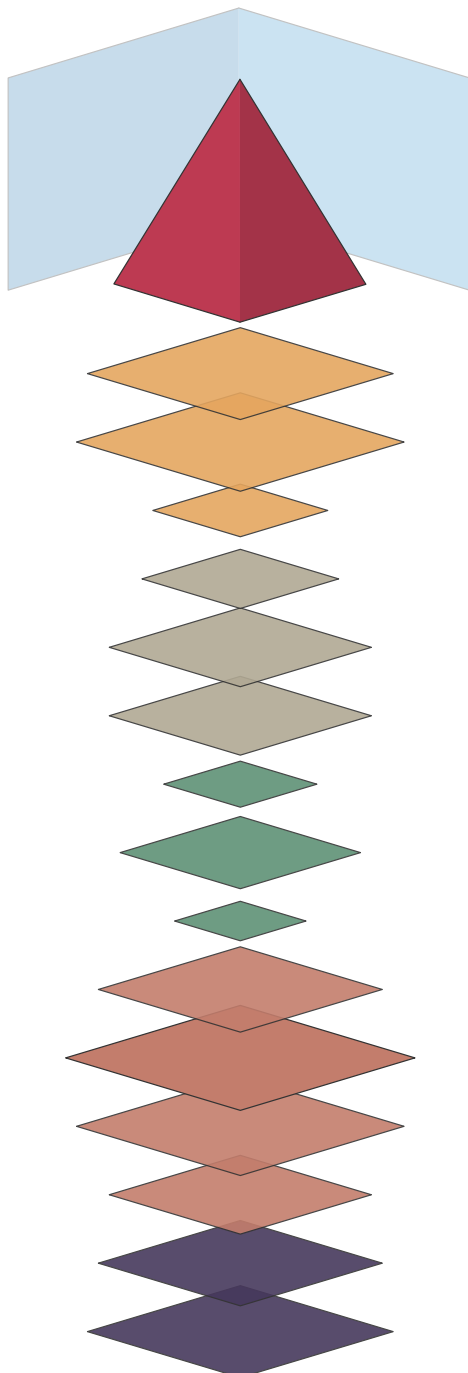




ESPAÑA



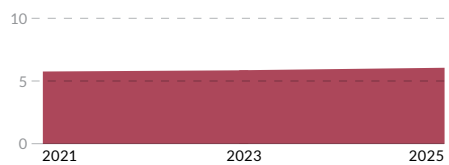
6.05 $\nearrow 0.15$

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

49.º de 193 pays $\nearrow 5$

5.º de 44 países europeos -

2.º de 8 países de Europa Meridional -



MERCADOS CRIMINALES

5.90 $\nearrow 0.20$

TRATA DE PERSONAS	7.00	0.00
TRÁFICO DE PERSONAS	7.50	$\nearrow 0.50$
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	4.00	0.00
TRÁFICO DE ARMAS	4.50	$\nearrow 0.50$
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	6.00	0.00
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	6.00	$\searrow 0.50$
DELITOS CONTRA LA FLORA	3.50	0.00
DELITOS CONTRA LA FAUNA	5.50	$\nearrow 0.50$
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	3.00	$\nearrow 0.50$
COMERCIO DE HEROÍNA	6.50	0.00
COMERCIO DE COCAÍNA	8.00	$\nearrow 0.50$
COMERCIO DE CANNABIS	7.50	0.00
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	6.00	$\nearrow 0.50$
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	6.50	$\nearrow 0.50$
DELITOS FINANCIEROS	7.00	0.00



ACTORES CRIMINALES

6.20 $\nearrow 0.10$

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	6.00	0.00
REDES CRIMINALES	7.00	0.00
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	5.50	$\nearrow 0.50$
ACTORES EXTRANJEROS	7.50	0.00
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	5.00	0.00



Financiamiento
proporcionado por
el Gobierno de los
Estados Unidos.

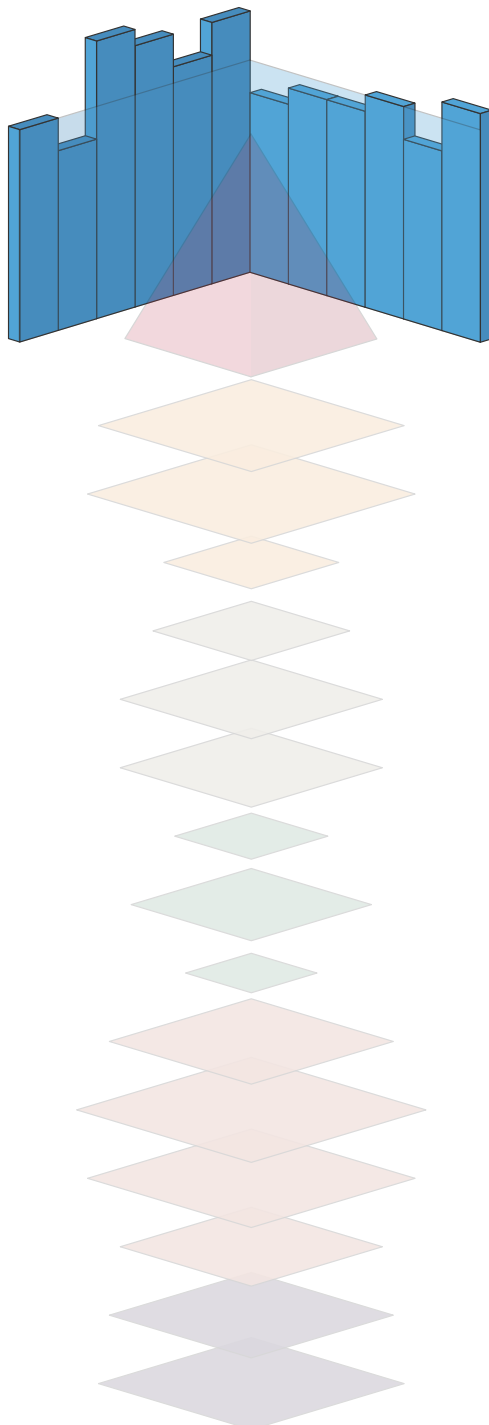


Funded by
the European Union

ENACT es un programa financiado por
la Unión Europea e implementado por el
Institute for Security Studies e INTERPOL,
en asociación con Global Initiative Against
Transnational Organized Crime.



ESPAÑA



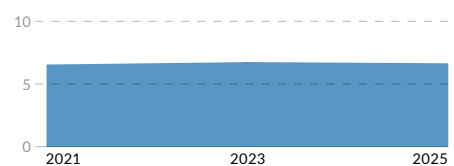
6.67 $\searrow 0.08$

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

28.º de 193 pays -

20.º de 44 países europeos -

1.º de 8 países de Europa Meridional -



LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	6.50	0.00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	5.50	$\searrow 0.50$
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	8.50	0.00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	8.00	0.00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	7.00	0.00
CUERPOS DE SEGURIDAD	8.00	0.00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5.50	0.00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	6.00	$\searrow 0.50$
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	6.00	0.00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	6.50	0.00
PREVENCIÓN	5.50	0.00
ACTORES NO ESTATALES	7.00	0.00



Financiamiento
proporcionado por
el Gobierno de los
Estados Unidos.



Funded by
the European Union

ENACT es un programa financiado por
la Unión Europea e implementado por el
Institute for Security Studies e INTERPOL,
en asociación con Global Initiative Against
Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

España sigue siendo un país clave de destino y de tránsito para la trata de personas, cuyas víctimas son explotadas principalmente con fines sexuales y laborales. Una proporción menor se destina al matrimonio forzado y a la explotación delictiva. Se cree que la mayoría de las personas que se dedican a la prostitución son víctimas de la trata, lo que pone de relieve el importante papel que desempeñan las redes del crimen organizado. Por su situación estratégica, España atrae a traficantes de África, América del Sur y Asia. La explotación laboral es frecuente en la agricultura, especialmente en las regiones del sur, donde las víctimas, que a menudo se encuentran en situación irregular, viven en unas condiciones similares a la esclavitud. Se ha identificado a las redes criminales chinas como actores claves en la explotación de las víctimas de la trata para el cultivo ilícito de la marihuana y la distribución de drogas. El tráfico de personas ha aumentado mucho en los últimos años y en la ruta de África Occidental a las islas Canarias ha habido un fuerte incremento de los cruces irregulares. Esta ruta también se ha convertido en una de las más mortíferas del mundo. Las organizaciones criminales de África del Norte y de España, que siempre han estado involucradas en el tráfico de drogas, se han expandido al tráfico de personas y utilizan «narcoembarcaciones» para transportar tanto migrantes como drogas. Las redes del tráfico aprovechan infraestructuras como los buques y los almacenes comerciales y también utilizan medidas de seguridad sofisticadas, como las tácticas de contravigilancia. Además, las redes de documentos fraudulentos colaboran en el tráfico, expidiendo permisos de trabajo y documentos de residencia falsos para las personas que desean entrar en España. Aunque la extorsión y los cobros ilegales por protección no están muy extendidos, se han documentado casos aislados en los que están implicados actores extranjeros, como la mafia búlgara y las pandillas sudamericanas. En el 2024, una operación conjunta con Europol dismanteló una red de «ladrones en la ley» que se dedicaba a la extorsión y los cobros ilegales por protección y al lavado de dinero. Se llevó a cabo otra operación contra una red rusa que se había infiltrado en las instituciones públicas y en el sector turístico.

TRÁFICO

El tráfico de armas en España sigue siendo moderado, aunque las incautaciones indican una preocupación creciente. Los grupos extremistas y las organizaciones criminales involucradas en el tráfico de drogas son los principales actores y a menudo utilizan armas para robar drogas y para las disputas territoriales. La normativa española sobre el

tráfico de armas se endureció en el 2024, para ajustarse a las directrices de la UE. Sin embargo, hay indicios de una creciente sofisticación en las operaciones de contrabando de armas, que entran en España principalmente por vía marítima y terrestre, a menudo ocultas en los envíos comerciales. Entre las armas de fuego que se trafican en España figuran los rifles automáticos, las metralletas y las armas impresas en 3D, que son cada vez más utilizadas por las bandas juveniles y las organizaciones criminales.

España es un centro importante de distribución de productos falsificados y las organizaciones criminales explotan la mano de obra para la producción y la venta. La falsificación provoca la pérdida de miles de puestos de trabajo y de miles de millones en ingresos en diversos sectores, como el cosmético, el farmacéutico, el tabacalero y el de las bebidas alcohólicas. Las redes criminales que se dedican a la falsificación han establecido cadenas de suministro que introducen los productos falsificados en los canales comerciales legítimos, lo que dificulta su detección. La mayoría de los artículos falsificados incautados en España siguen procediendo de China, Turquía e India.

Persiste el comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, principalmente tabaco y alcohol. Sin embargo, en los últimos años ha disminuido el consumo de productos de tabaco de contrabando, gracias a las importantes operaciones de dismantelamiento de las redes de contrabando de tabaco llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad. No obstante, España sigue habiendo flujos ilícitos de tabaco, especialmente desde Gibraltar y Andorra, y Andalucía registra los índices más altos de consumo de cigarrillos ilícitos. Las organizaciones criminales aprovechan las lagunas normativas en el comercio transfronterizo, lo que convierte a España en un país de destino y de tránsito de productos de tabaco ilícitos. Las autoridades han identificado a grupos extranjeros de tipo mafioso como actores claves en este mercado, en particular los que tienen vínculos con Europa del Este y África del Norte.

MEDIOAMBIENTE

El mercado de los delitos contra la flora está poco desarrollado en España, pero el tráfico de madera sigue siendo un problema. En el 2024 se descubrieron casos de tala ilegal de especies protegidas y de comercio no autorizado de maderas de gran valor, como la caoba y el cedro brasileño. Las peticiones para mejorar las protecciones legales se han intensificado tras unos casos notorios de deforestación en Madrid. Debido a la escasa aplicación de la normativa medioambiental, los traficantes pueden explotar el sector y se suelen hacer envíos de madera con declaraciones falsas para eludir el control regulatorio. Los delitos contra la fauna están más arraigados, ya que España es un lugar de tránsito clave para

el tráfico ilegal de especies silvestres procedente de América del Sur y de África. Entre las grandes incautaciones del 2024 se encuentran las angulas, una lucrativa exportación a Asia. El comercio ilegal de pieles también sigue siendo motivo de preocupación y la mayoría de las exportaciones van a Estados Unidos, a Corea del Sur y a Hong Kong. Las organizaciones criminales especializadas en el tráfico de especies silvestres utilizan métodos de contrabando sofisticados, como la falsificación de documentos y las rutas de aviación privadas, para transportar especies de gran valor sin ser detectadas. Aunque los delitos contra los recursos no renovables no están muy desarrollados, persisten el contrabando ilícito de oro y las violaciones de la legislación minera. En el 2024, España estuvo implicada en una trama de blanqueo de oro dirigida por un cártel y se documentaron operaciones mineras ilegales en Andalucía y en Galicia. La explotación de los recursos naturales sigue suscitando preocupaciones medioambientales y laborales. El crimen organizado está interviniendo más en la industria minera española, sobre todo en operaciones ilegales de extracción de minerales, donde a menudo se explota a los trabajadores locales.

DROGAS

El mercado de la heroína en España es más reducido que el de la cocaína y el cannabis, pero sigue estando bien establecido. Pontevedra, en Galicia, es el principal punto de entrada de la heroína en el país. La droga suele llegar a España por la ruta del sur, que nace en Pakistán o en Irán, pasa por África Austral o África Occidental y entra por África del Norte. Sin embargo, las incautaciones recientes indican que existe una ruta alternativa, por vía terrestre, desde los Países Bajos. A pesar de su presencia, el consumo de heroína en España sigue siendo bajo y los grupos de traficantes tienden a evitar la violencia.

España se ha convertido en la principal puerta de entrada de la cocaína en Europa, con incautaciones récord en el 2024. El aumento de la seguridad en Bélgica y los Países Bajos ha desplazado las rutas del tráfico hacia España, en particular a través de Valencia, Algeciras y Barcelona. Entre los grupos delictivos implicados se encuentran la 'Ndrangheta italiana, las redes de habla albanesa y los cárteles colombianos. La corrupción en los puertos y en la logística facilita el tráfico, mientras que la competencia entre los grupos delictivos ha provocado un aumento de la violencia, especialmente en las zonas donde las redes rivales se disputan el control del territorio.

El tráfico de cannabis sigue siendo muy lucrativo, ya que España es el principal productor de cannabis de Europa y uno de los principales lugares de entrada del hachís procedente de Marruecos. El uso de narcoembarcaciones ha provocado enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. El aumento de la violencia relacionada con el cannabis y el incremento de los niveles de THC en los productos ilícitos han suscitado preocupación por la salud pública. El cultivo

nacional de marihuana en España ha aumentado y algunas redes de producción están vinculadas a organizaciones criminales extranjeras, entre ellas los grupos de habla albanesa y los chinos.

El mercado de las drogas sintéticas está creciendo, especialmente el de la MDMA y la «cocaína rosa» (tusi). Los laboratorios desmantelados en el 2024 presentaban un alto grado de sofisticación. España es un centro importante de distribución y tiene redes de tráfico vinculadas al ambiente nocturno de Ibiza. Las incautaciones de metanfetamina también han aumentado y algunas operaciones están relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Se ha producido un notable incremento de la producción de drogas sintéticas y han aparecido laboratorios clandestinos en zonas urbanas, a menudo equipados con instalaciones avanzadas de procesamiento químico.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Los delitos dependientes de la cibernética han aumentado significativamente en los últimos años. Son frecuentes los ataques de ransomware, el pirateo y los delitos dependientes de la cibernética dirigidos a empresas. Además de los actores del sector privado, las instituciones públicas y los medios de comunicación suelen ser blanco de los ciberdelincuentes. Las instituciones sanitarias también han sido objeto de ataques, con un ataque notorio de ransomware contra un hospital de Barcelona en el 2024. Las redes de ciberdelincuentes que operan en España se están especializando cada vez más y utilizan una codificación avanzada y mercados de la web oscura para llevar a cabo actividades ilícitas.

DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros, en particular el fraude y la evasión fiscal, siguen siendo un problema persistente en España. El fraude cibernético aumentó en el 2024 y se generalizaron las estafas de phishing y el fraude en las inversiones. El país es uno de los que más evaden impuestos de Europa y se estima que los patrimonios en paraísos fiscales ascienden a miles de millones de euros. En el 2024 se desmanteló una red criminal dedicada al fraude del IVA por valor de varios millones de euros mediante la importación de coches de lujo. La corrupción política sigue siendo motivo de preocupación y ha habido casos de malversación en distintos niveles de la administración. En el 2024, varios casos notorios de corrupción sacaron a la luz usos indebidos de fondos y redes de sobornos en los que estaban implicados funcionarios públicos.

ACTORES CRIMINALES

Aunque las autoridades nacionales no reconocen oficialmente la presencia de mafias de origen español, operan en el país varios clanes criminales familiares que presentan características propias de la mafia. Estos grupos, especialmente en Galicia

y en Andalucía, controlan las rutas del tráfico de drogas y mantienen su influencia en las comunidades locales. Sin embargo, su estructura ha evolucionado y se ha vuelto más fluida, lo que les permite evitar las medidas represivas de los cuerpos de seguridad. A diferencia de los grupos mafiosos tradicionales, no ejercen un control territorial generalizado, sino que se centran en corredores específicos del tráfico de drogas y en los barrios locales. En Sevilla, los clanes de tipo mafioso siguen siendo muy activos y compiten por el control de las redes de distribución de drogas. Las disputas territoriales entre estos grupos han provocado una escalada de violencia y recientemente se han producido incidentes que han suscitado preocupación por posibles enfrentamientos en represalia. La creciente internacionalización del crimen organizado en España ha dado lugar a la adaptación de estos grupos, que han reducido su participación directa en la venta de drogas, mientras que han reforzado su papel como intermediarios en operaciones de tráfico a gran escala.

España alberga una red variada de grupos del crimen organizado, muchos de los cuales operan en las zonas costeras y en las ciudades portuarias claves, como Valencia, Barcelona, Algeciras y ciudades gallegas. Estas redes no tienen una estructura uniforme: algunas tienen un liderazgo jerárquico, mientras que otras funcionan como empresas delictivas descentralizadas. Cada vez más, las redes criminales españolas prestan servicios logísticos y de infraestructura a los actores extranjeros y colaboran en operaciones de tráfico de drogas, tráfico de personas y lavado de dinero. Las redes criminales del sur de España mantienen vínculos estrechos con las organizaciones de narcotraficantes, lo que facilita el transporte de hachís desde Marruecos en embarcaciones de alta velocidad. Estos grupos varían constantemente sus rutas de contrabando, según los esfuerzos de los cuerpos de seguridad, lo que les permite mantener sus operaciones, a pesar del aumento de los controles fronterizos. Los cuerpos de seguridad españoles también han observado que cada vez hay más redes criminales que ofrecen servicios especializados, como la falsificación de documentos y el tráfico de armas, a otras organizaciones ilícitas. Recientemente, las autoridades han desmantelado algunas redes delictivas transnacionales involucradas en delitos financieros posibilitados por la cibernética y en el tráfico de armas, como una operación que aprovechaba las lagunas comerciales para evadir los derechos de aduana.

España no presenta una criminalidad generalizada integrada en el Estado, aunque siguen saliendo a la luz casos de corrupción de policías y funcionarios de aduanas, especialmente en relación con el tráfico de drogas. Algunos funcionarios públicos se han visto implicados en tramas que facilitan el contrabando a cambio de compensaciones económicas. Estos casos suelen involucrar al personal de los cuerpos de seguridad en puntos de tránsito claves, que proporcionan información y apoyo logístico a las organizaciones de traficantes. Algunas investigaciones han revelado casos de corrupción administrativa, como unos funcionarios sospechosos de manipular las normas comerciales y aduaneras para beneficiar a empresas criminales. Además, en algunos

casos recientes se ha descubierto la participación directa de altos funcionarios, incluso de las unidades de lucha contra el lavado de dinero y el fraude, en tramas de corrupción. Aunque estos incidentes no indican una captura criminal sistémica del Estado, muestran las vulnerabilidades existentes en la seguridad fronteriza y en los marcos normativos de España.

Los actores extranjeros ejercen una influencia significativa en el panorama del crimen organizado de España, donde hay organizaciones criminales de más de 30 países que están involucradas activamente en actividades ilícitas. Estas organizaciones suelen establecer alianzas estratégicas con las redes locales, lo que refuerza sus operaciones de tráfico de drogas, lavado de dinero y contrabando de armas. La mafia italiana, en particular la 'Ndrangheta y la Camorra, mantiene en España una presencia discreta, pero arraigada, aprovechando sus conexiones tradicionales con los cárteles latinoamericanos de la droga. Estos grupos se centran principalmente en el tráfico de cocaína y en el lavado de dinero y aprovechan el sector inmobiliario y el hotelero de España para sus operaciones financieras. La «Mocro Mafia», que opera sobre todo en los Países Bajos y en Bélgica, se ha vuelto cada vez más violenta y

visibles en España, especialmente en Marbella y en Algeciras, donde se especializa en coaccionar a los trabajadores portuarios para que faciliten la importación de drogas. Otros grupos extranjeros importantes son las redes colombianas, que gestionan los envíos de cocaína, y los grupos originarios de los Balcanes Occidentales, que han consolidado su control sobre las principales rutas marítimas de contrabando. La mafia rusa sigue centrándose en los delitos financieros y en el lavado de dinero y se ha integrado en el mercado inmobiliario y en el sector turístico español. Las organizaciones criminales chinas también desempeñan un papel crucial, especialmente en las tramas de lavado de dinero, y a menudo actúan como intermediarios financieros para otros grupos criminales. Algunas pandillas juveniles vinculadas a organizaciones criminales latinoamericanas, como los Dominican Don't Play y los Trinitarios, se dedican al tráfico de drogas y al comercio de armas en las calles. Estos grupos reclutan cada vez más a menores, lo que suscita preocupación por la expansión a largo plazo en España de la actividad de las pandillas con vínculos en el extranjero.

Aunque las organizaciones criminales no controlan directamente las grandes industrias, el sector hotelero y el inmobiliario españoles sirven como canales principales para el lavado de dinero y para actividades financieras ilícitas. Las redes criminales suelen invertir en propiedades de lujo, locales de entretenimiento y negocios relacionados con el turismo y utilizan estas industrias para introducir las ganancias ilícitas en la economía legal. Según las investigaciones sobre los casos de lavado de dinero, se utilizan estructuras corporativas complejas y mecanismos financieros extraterritoriales para facilitar las transacciones ilícitas a gran escala. Los cuerpos de seguridad españoles han desmantelado recientemente varias redes involucradas en transacciones comerciales fraudulentas, lo que demuestra

que los delincuentes aprovechan las instituciones financieras para legitimar los fondos ilícitos. El papel de España como centro financiero del crimen organizado internacional pone de relieve los retos que sigue planteando la aplicación de la normativa contra el lavado de dinero y la supervisión de los

sectores empresariales de alto riesgo. A pesar de la mejora de las medidas de cumplimiento, las entidades delictivas siguen aprovechando los puntos débiles en la supervisión empresarial y la transparencia financiera.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Los dirigentes políticos españoles se han enfrentado a retos a la hora de abordar el crimen organizado y sus programas electorales varían en cuanto al énfasis que dan a todo lo relacionado con esta cuestión. Aunque el partido actualmente en el poder no ha dado prioridad explícita al crimen organizado en su agenda política, los partidos de la oposición lo han acusado de mostrar una actitud indulgente. Los indicadores de gobernanza del país reflejan un sistema democrático estable, pero la confianza en las instituciones nacionales sigue siendo relativamente baja, mientras que la confianza pública en la gobernanza regional y local es relativamente mayor. Si bien los movimientos separatistas catalanes han introducido cierta fragilidad política en el país, los esfuerzos recientes indican un cambio hacia la resolución. El Gobierno está tratando de aprobar una ley de amnistía que concedería impunidad a las personas implicadas en la crisis, a fin de promover la reconciliación política. En cuanto a hacer frente a formas específicas de criminalidad, la lucha contra la ciberdelincuencia es una prioridad declarada del Gobierno, que ha puesto en marcha iniciativas estratégicas para reforzar la sensibilización sobre la ciberseguridad y la capacidad de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, a pesar del aumento de las inversiones en la prevención de la ciberdelincuencia, España ha sufrido numerosos ciberataques, especialmente en torno a los periodos electorales, por lo que preocupa su preparación para hacer frente a las amenazas digitales. La trata de personas sigue siendo un objetivo clave de los esfuerzos de los cuerpos de seguridad y han aumentado las víctimas identificadas y los procesamiento penales.

Se ha fiscalizado la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas y preocupan la corrupción y la financiación de los partidos políticos. El marco anticorrupción de España incluye organismos fiscales especializados que se dedican a investigar los delitos relacionados con la corrupción y las medidas legislativas garantizan el acceso público a los registros gubernamentales. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil y los observadores internacionales han criticado los obstáculos burocráticos para obtener la información que el Gobierno tiene en su poder. Además, se ha señalado que la agencia responsable de supervisar las normas de transparencia no dispone de suficientes recursos

financieros ni humanos. Aunque existe un marco jurídico para la transparencia, su cumplimiento ha sido desigual, lo que ha dado lugar a retos continuos en la rendición de cuentas.

España participa activamente en los esfuerzos de cooperación internacional para combatir el crimen organizado transnacional. El país ha ratificado importantes convenios internacionales relacionados con el crimen organizado, la corrupción y el tráfico de drogas y ha reforzado los acuerdos bilaterales con socios europeos, africanos y latinoamericanos. La colaboración con Europol, INTERPOL y otras organizaciones de seguridad sigue siendo una piedra angular de la estrategia española de lucha contra la criminalidad. España ha firmado acuerdos de extradición con varios países, aunque existen lagunas con naciones que carecen de tratados formales de extradición, lo que en ocasiones dificulta el procesamiento de los fugitivos.

Las políticas nacionales y el marco jurídico de España son sólidos a la hora de abordar las diversas formas del crimen organizado. El país cuenta con una legislación penal exhaustiva contra la trata de personas, el tráfico de drogas y el lavado de dinero, entre otros delitos. Sin embargo, el marco jurídico para la protección de las víctimas sigue siendo fragmentario y se está tratando de armonizar las leyes y de centralizar los mecanismos de apoyo a las víctimas. Las recientes reformas legislativas han mejorado la respuesta de España a los delitos financieros, lo que refleja su compromiso de ajustarse a las normas internacionales de lucha contra el lavado de dinero.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial español cuenta con unidades fiscales especializadas que se encargan de resolver los casos de crimen organizado, como las oficinas dedicadas a la corrupción, el tráfico de drogas, la trata de personas y la ciberdelincuencia, lo que garantiza una acción legal específica contra las redes criminales. Aunque los procesamiento siguen siendo eficaces, en ocasiones se ha cuestionado la imparcialidad de los funcionarios judiciales y se los ha criticado por los retrasos en la tramitación de los casos. Las deficiencias en la capacitación, especialmente para resolver los casos de trata de personas, han dado lugar a lagunas en la protección de las víctimas y en los procedimientos judiciales. El sistema

penitenciario español se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos y las condiciones de vida, la atención sanitaria y la asistencia jurídica de los reclusos son adecuadas.

La población carcelaria ha ido disminuyendo, en parte gracias a la aplicación de penas sustitutivas. Sin embargo, el aumento de los suicidios de reclusos ha llevado a las autoridades a revisar las políticas de prevención del suicidio en los centros penitenciarios.

Los cuerpos de seguridad españoles, como la Policía Nacional y la Guardia Civil, mantienen una gran capacidad operativa en la lucha contra el crimen organizado. El país ha alcanzado unos niveles de personal más altos que nunca, lo que refleja el aumento de la inversión gubernamental en la seguridad nacional. Los cuerpos de seguridad especializados se centran en los delitos financieros, el tráfico de drogas y los delitos ambientales, aunque su credibilidad se debilita a veces por los casos de corrupción, especialmente entre los funcionarios de aduanas. Además, el Gobierno ha seguido invirtiendo en la mejora de la labor policial, incluidos los avances tecnológicos. Sin embargo, siguen existiendo retos en el intercambio de información y en el desarrollo de un enfoque más coordinado y holístico para combatir el crimen organizado.

La integridad territorial de España se sigue enfrentando a amenazas debido a su situación estratégica entre Europa, África y América Latina, lo que la convierte en un lugar de tránsito clave para las operaciones de tráfico de drogas y de personas. El aumento de la cooperación bilateral con Marruecos en materia de seguridad ha contribuido a mitigar los flujos migratorios irregulares y a combatir las organizaciones delictivas transnacionales. Sin embargo, las rutas del tráfico siguen siendo dinámicas y los traficantes han adaptado sus métodos al refuerzo de los controles fronterizos.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

España sigue siendo un centro fundamental para el lavado de dinero y las organizaciones criminales aprovechan el sector inmobiliario, el hotelero y el financiero para blanquear las ganancias ilícitas. El país ha promulgado normas estrictas para luchar contra el lavado de dinero, cuyo cumplimiento supervisan las unidades de inteligencia financiera y los organismos reguladores. Sin embargo, las organizaciones criminales siguen aprovechando las lagunas financieras, en particular mediante transacciones con criptomonedas y sociedades ficticias. España ha mejorado su colaboración con los organismos internacionales de control financiero y trabaja codo con codo con el Grupo de Acción Financiera Internacional y con la UE para reforzar las medidas de lucha contra el lavado de dinero. A pesar de todos estos esfuerzos, se sigue sin detectar una parte significativa de los fondos blanqueados.

El entorno normativo económico de España es, en general, propicio para las operaciones comerciales legítimas, ya que tiene un marco jurídico bien establecido, que pretende

impedir que la delincuencia interfiera en las actividades comerciales. España mantiene varias zonas de libre comercio que facilitan el comercio internacional, pero que también pueden presentar vulnerabilidades para las actividades ilícitas. Las instituciones financieras del país han mejorado los mecanismos de detección del fraude, como las iniciativas de colaboración entre los principales bancos para evitar los delitos financieros. No obstante, la evasión fiscal y el ocultamiento de activos en paraísos fiscales siguen siendo retos persistentes que requieren una mayor cooperación normativa transfronteriza.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Los mecanismos de apoyo a víctimas y testigos están establecidos, pero hay que mejorarlos, sobre todo en el ámbito de la trata de personas y en el de la protección de testigos. Aunque España ha promulgado leyes que garantizan los derechos de las víctimas y su representación jurídica, el acceso a los servicios de protección suele estar condicionado a que las víctimas colaboren con los cuerpos de seguridad, lo que disuade a muchas de ellas de solicitar ayuda. El Gobierno se ha asociado con oenegés y con organizaciones de la sociedad civil para mejorar los marcos de identificación y de apoyo a las víctimas, pero siguen existiendo lagunas en la recopilación de datos y en los programas de ayuda.

Las iniciativas de prevención en España hacen hincapié en las campañas de sensibilización, la ampliación de los cuerpos de seguridad y el aumento de las sanciones por los actos delictivos. El Gobierno ha puesto en marcha planes estratégicos para luchar contra la trata de personas, la ciberdelincuencia y las estafas financieras, a menudo en colaboración con socios internacionales. Aunque se han logrado avances, España carece de una estrategia nacional unificada de prevención del delito y las medidas contra la corrupción están muy fragmentadas. La legislación reciente ha mejorado la protección de los denunciantes y ha ajustado el marco jurídico español a las directrices de la UE sobre responsabilidad corporativa y la lucha contra el fraude.

Los actores no estatales, como las oenegés y las organizaciones mediáticas, desempeñan un papel importante en la sensibilización sobre el crimen organizado y la corrupción. Los grupos de la sociedad civil participan activamente en las iniciativas de prevención del delito, en la defensa de las víctimas y en la transparencia gubernamental. Sin embargo, las oenegés siguen encontrando restricciones para identificar formalmente a las víctimas de la trata de personas, lo que limita su papel en la colaboración directa con los cuerpos de seguridad. El panorama mediático español sigue siendo bastante libre, pero la polarización política y las presiones a los periodistas han suscitado preocupación por la libertad de prensa. Aunque el periodismo de investigación sigue sacando a la luz casos de corrupción y de crimen organizado, a veces las amenazas jurídicas y la injerencia política han debilitado la independencia periodística. Los esfuerzos por despenalizar determinados delitos relacionados con los símbolos del

Estado y las leyes de difamación suponen un avance en la protección de la libertad de expresión. No obstante, se ha criticado a las autoridades por algunos incidentes ocurridos en el pasado, relacionados con la detención de periodistas que cubrían protestas o asuntos políticos delicados.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.